

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

2460 *RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se recogen modificaciones y concesiones de ayudas de matrícula de becas de la convocatoria general de Becas MAE, curso 2002/03.*

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del apartado cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero), en la que se establecen las bases para la concesión de becas y ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y la publicación de otras convocatorias específicas para ayudas de formación, investigación, promoción cultural, científica o de intercambio y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, y en atención a lo establecido en el apartado 2.1 d) de la Resolución de 29 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero 2001), de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se delegan en el Secretario general de la AECI y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas competencias, y en virtud de la Resolución de 18 de enero de 2002 («Boletín Oficial del Estado» número 27, del 31) por la que se aprueba la convocatoria general de «Becas MAE», y las Resoluciones por las que se conceden becas de la convocatoria general de «Becas MAE» de fechas 1-7-2002 y 29-8-2002, a propuesta de la Comisión de evaluación reunida al efecto, ha resuelto:

Primero.—Modificar las fechas de duración de la beca concedida por resolución de la AECI de 29 de agosto de 2002 a los becarios que a continuación se relacionan, para que coincidan con los estudios que van a realizar:

Programa II B:

Simón Astiz Peralta (Venezuela) 1-6-2003/31-12-2003.
Rosas Bustillos Lemaire (Costa Rica) 1-7-2003/31-7-2003.
Rosana Morales Ordóñez (Ecuador) 1-1-2003/31-12-2003.

Segundo.—Conceder una ayuda de matrícula de hasta 1.202,00 euros, según se indica en la base quinta.3 de la convocatoria de Becas MAE, a los becarios que a continuación se relacionan:

Programa II B:

Patricio Artigas Bascur (Chile).
Úrsula Martínez Monterrubio (México).
Constance Marie Keroglian Gómez (Uruguay).

Tercero.—La dotación económica de estas becas es de 902,00 euros mensuales, más un seguro de asistencia médica primaria, no farmacéutica, durante el periodo de vigencia de la beca.

Cuarto.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las becas reconocidas en esta Resolución en los términos previstos por la citada Orden de 26 de marzo de 1992, y Resolución de 18 de enero de 2002.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción. Potestativamente podrá interponer contra dicha Resolución, en el plazo de un mes, recurso administrativo ordinario, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14). Todo ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Madrid, 15 de enero de 2003.—El Presidente, P.D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 2001), el Secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones Culturales y Científicas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

2461 *RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Parc Vallès Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Terrassa número 1, don Mariano Alberdi Frías, a inscribir determinadas servidumbres.*

En el recurso gubernativo interpuesto por don Luis Vila Barrón, en nombre de «Parc Vallès Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Terrassa, número 1, don Mariano Alberdi Frías, a inscribir determinadas servidumbres.

Hechos

I

El 6 de junio de 2002, mediante escritura pública autorizada por el Notario de Barcelona, don Antonio Bosch Carrera, «Parc Vallès Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima» constituye sobre la finca registral 83130 (con tres cuerpos de edificación A.1, B.1 y C.1) servidumbre de paso y uso peatonal a favor del local B.1 que está arrendado a cierta sociedad, con carácter perpetuo, si bien se establece como condición resolutoria de la misma, el caso de que en el local B.1 no se explote la actividad de exhibición de salas de cine durante el plazo que se determina y las servidumbres negativas de uso siguientes: Servidumbre negativa 1 que se constituye con carácter de servidumbre personal y «ob rem» cuyo contenido lo constituye la abstención de ejercer sobre el predio sirviente las actividades o uso de salas de exhibición de películas y otras representaciones audiovisuales o teatrales y/o destinadas a otros espectáculos de entretenimiento; y la servidumbre negativa de uso 2, que también se constituye con carácter de servidumbre personal y «ob rem» cuyo contenido lo constituye la abstención de ejercer sobre el predio sirviente la venta de palomitas de maíz y dulces o golosinas, a excepción de un centro de entretenimiento familiar. Las dos servidumbres negativas se constituyen a favor del local B1 y por todo el tiempo de duración del contrato de arrendamiento.

II

Presentada copia de la citada escritura en el Registro de la Propiedad de Terrassa número 1, fue calificado con la siguiente nota: «... se observan los siguientes defectos que impiden la inscripción solicitada: Hechos: 1. Falta la ratificación de lo actuado por el mandatario verbal señor Garza. 2. No pueden identificarse las zonas coloreadas en que se concretan las servidumbres por cuanto el plano que se acompaña es en blanco y negro y no se distinguen dichas zonas. 3. Las servidumbres negativas de no uso no son inscribibles por su carácter personal y naturaleza obligacional. 4. A los efectos de inscripción del cambio de denominación de la titular registral "Eurofund Investments, Sociedad Anónima", debería acompañarse la escritura que se cita en la que se procedió a tal cambio. Fundamentos de Derecho: Artículo 1.259 del Código Civil. Artículo 51 del Reglamento Hipotecario. Artículos 9 y 51-6.º del Reglamento Hipotecario. Artículos 9 y 19 de la Ley Hipotecaria. Contra esta calificación cabe interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de un mes desde su notificación, mediante la presentación del escrito del recurso en las oficinas y registros previstos en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria y por los trámites establecidos en los artículos 324 y siguientes de la propia Ley Hipotecaria. Se prorroga la vigencia del asiento de presentación durante sesenta días conforme al artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Terrassa a 4 de julio de 2002. El Registrador. Firma ilegible».

III

Don Luis Vila Barrón interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: 1. Que las servidumbres personales quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 22/2001 por circunscribirse a las servidumbres prediales, no hay duda de que pueden configurarse derechos reales del tipo de las servidumbres personales en Cataluña, como se reconoce en la disposición adicional de la citada Ley. Que en cuanto a la regulación de las servidumbres personales hay que atender a lo libremente pactado por las partes en el título constitutivo y supletoriamente al Código Civil. Que la normativa alegada por el Registrador se circunscribe al Código Civil y Ley Hipotecaria. 2. Que las servidumbres negativas se constituyen con el carácter de servidumbres a favor de una persona física o jurídica en cuanto titular de un derecho de uso del local B1 en concepto de arriendo u subarriendo, según habilita el artículo 531 en combinación con el artículo 530 del Código Civil. Que la naturaleza y características se han determinado por la doctrina y las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1967 y 30 de junio de 1991. Que el carácter personal de una servidumbre no prejuzga su naturaleza real, pues ésta viene dada por su contenido. 3. Que el contenido típico de las servidumbres negativas es un non facere, es decir al titular del predio sirviente se le prohíbe hacer algo que le sería lícito si no existiera la servidumbre (artículo 533 del Código Civil). Que cabe recordar que el contenido obligacional de los derechos reales no es una hipótesis aislada sino frecuente y que los derechos reales tienen a menudo un contenido obligacional a cargo del sujeto pasivo (artículo 545 del Código Civil). Que en el caso que se estudia, la abstención de realizar la actividad (non facere) conlleva también necesariamente tolerar que el titular de la servidumbre realice tales actos. Que en lo referente al contenido de las servidumbres es unánime el criterio de la doctrina y la Resolución de 14 de mayo de 1984. Que la noción del derecho real de servidumbre viene configurada por la Ley, y su contenido está presidido por la libre determinación de las partes (artículos 1255 y 594 del Código Civil y 51 del Reglamento Hipotecario). Que la doctrina científica y la Resolución antes citada han reiterado siguiendo el criterio de autonomía de la voluntad del artículo 1.255 del Código Civil, recogido explícitamente en el artículo 594 para las servidumbres, que para determinar si una obligación de no hacer tiene carácter de derecho real o derecho de crédito hay que atenderse a la voluntad de las partes. Que las servidumbres negativas en cuanto a derecho real, implican un deber de no actuar que está ligado a la titularidad del predio sirviente y que se transmite con la finca. Que se han configurado las servidumbres negativas con los dos caracteres típicos del derecho real, la inmediatividad y la absolutividad, con que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General definen a los derechos reales (Resolución de 1 de abril de 1981). 4. Que el hecho de que el contenido de las dos servidumbres negativas sea atípico no puede por sí llevar a rechazar de plano el carácter real e inscribible de estos derechos. Que hay que citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2002 y la Resolución de 25 de noviembre de 1992. 5. Que en este caso se dan todos los requisitos para acceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad: 1) Por la naturaleza y contenido del dere-

cho constituido como servidumbre personal de carácter real en cuanto que se dan las características de inmediatividad y absolutividad o protección erga omnes del derecho del beneficiario de la servidumbre; 2) Que se cumplen las exigencias del principio de especialidad que rige en nuestro sistema hipotecario.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: Que el Código Civil trata en su Título VII, del Libro II, de las servidumbres prediales y alude a las personales, pero sólo les dedica el artículo 531, por lo que se demuestra la existencia de las mismas. El artículo 533 admite la existencia de servidumbres positivas y negativas. La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en su capítulo II, regula el derecho real de servidumbre y no alude para nada a las servidumbres personales. Que en aplicación del derecho hipotecario, la inscripción (artículo 13 de la Ley Hipotecaria) de las dos servidumbres negativas tiene un marcado carácter personal entre el titular de la servidumbre y el propietario del predio gravado. El primero no tiene derecho alguno sobre la cosa. El titular de la servidumbre tiene una actividad que no puede hacer el titular del predio sirviente y se consideran de carácter personal, por lo que su inscripción ha sido denegada. Que en las dos servidumbres de que se trata, no puede hablarse de poder alguno inmediato del titular de la servidumbre sobre cosa ajena por que este no tiene necesidad de poder alguno sobre la cosa para conseguir la satisfacción de su interés. El interés de su titular se satisface por una limitación de la propiedad del predio sirviente, mediante la imposición a este último de una obligación de no vender golosinas ni hacer espectáculos que son contrarios al interés del titular de la servidumbre. Que se está en presencia de una obligación, como lo demuestra el hecho de que el comportamiento del sujeto pasivo es por sí solo suficiente para satisfacer el interés del titular de la servidumbre, la cual constituye el carácter peculiar de la relación obligacional. En definitiva, la servidumbre negativa se realiza exclusivamente por medio de una relación obligacional. Que el recurso se fundamenta principalmente en el principio de la autonomía de la voluntad, pero ello no autoriza a constituir cualquier relación jurídica inmobiliaria con el carácter y efectos de un derecho real, creando tipos contradictorios de servidumbres, contiene declarado diversas Resoluciones como las de 27 de octubre de 1947, 11 de abril de 1930, 23 de noviembre de 1934, 7 de abril de 1970 y 12 de noviembre de 1997.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 530, 531, 536 y 594 del Código Civil, 2.2.º de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones de esta Dirección General de 27 de octubre de 1947, 21 de septiembre de 1966, 14 de mayo de 1984 y 6 de marzo de 2001,

1. Se presenta en el Registro escritura por la que el dueño de un edificio constituye sobre el mismo dos servidumbres personales a favor del arrendatario de uno de los locales del siguiente tenor:

a) «Constituye el contenido de la servidumbre negativa 1 la abstención de ejercer sobre el predio sirviente las actividades y usos siguientes: Salas de exhibición de películas u otras representaciones audiovisuales o teatrales y/o destinadas a otros espectáculos de entretenimiento.»

b) «Constituye el contenido de la servidumbre negativa 2 la abstención de ejercer sobre el predio sirviente las actividades y usos siguientes: Venta de palomitas de maíz y dulces o golosinas.»

Se señalan igualmente los supuestos en que se extinguirá una y otra servidumbre.

El Registrador, aparte de otros defectos no recurridos, rechaza la inscripción por estimar que «las servidumbres negativas de no uso no son inscribibles por su carácter personal y naturaleza obligacional». El presentante recurre la calificación.

2. La doctrina, la jurisprudencia y las resoluciones de este Centro Directivo son mayoritariamente conformes en que en nuestro derecho rige el sistema de «numerus apertus», es decir, que, para constituir un derecho como real no es preciso que el mismo esté tipificado legalmente, sino que basta con la voluntad de los interesados y que el derecho constituido tenga los caracteres de tal derecho. Esta posibilidad de «numerus apertus» es más palpable en materia de servidumbres, donde aparece claramente establecida en los artículos 536 y 594 del Código Civil, que sobre la base del principio de autonomía de la voluntad recogido en el artículo 1.255 del mismo cuerpo legal, autoriza la constitución de servidumbres siempre que no se contradiga la ley ni el orden público, lo que no sucede en este

caso, en que las servidumbres constituidas son consecuencia de relaciones económicas generadas por la realidad.

3. En el presente supuesto el gravamen constituido está perfectamente delimitado en su contenido y, si bien podría haberse constituido como una simple obligación, al efecto de que el mismo sea oponible a sucesivos titulares del predio sirviente, se constituye con derecho real, es decir, como verdadera servidumbre, lo que no contradice la ley ni el orden público, está perfectamente delimitado en su contenido, y obedece a un interés legítimo, como es el del titular de la servidumbre, en beneficio de su actividad comercial.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto, revocando la calificación del Registrador, en cuanto al defecto recurrido.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—La Directora general, Ana López-Monís Gallego.

Sr. Registrador de la Propiedad número 1 de Terrassa.

2462

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Junta de Andalucía contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cazorla, don Ricardo José Nieves Carrascosa, a inscribir una finca adquirida por la Consejería de Medio Ambiente, en virtud del ejercicio del derecho de retracto.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía, don Antonio-Luis Faya Barrios, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cazorla, don Ricardo-José Nieves Carrascosa, a inscribir de una finca adquirida por la Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en virtud del ejercicio del derecho de retracto.

Hechos

I

Por escritura otorgada el día 28 de junio de 1999, ante la Notario de Quesada doña Rocío García-Aranda Pez, doña Mercedes G. C. vendió a don Julián R. una finca sita en término municipal de Pozo Alcón, registral 1.315. Con fecha 14 de julio de 1999, la Consejería de Medio Ambiente tuvo conocimiento de la venta de la finca, la cual se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Por resolución de 2 de diciembre de 1999 se acuerda la adquisición de dicha finca, en virtud del ejercicio del derecho de retracto, al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (artículo 10.3) y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, que se remite en su artículo 24 a la Ley estatal.

El 10 de octubre de 2000 se extiende el acta de ocupación y se consigna la cantidad correspondiente en la Caja de Depósitos a disposición de don Julián R. R.

II

Presentados los anteriores documentos en el Registro de la Propiedad de Cazorla fueron calificados con la siguiente nota: «Visto por don Ricardo José Nieves Carrascosa, Registrador de la Propiedad de Cazorla, Provincia de Jaén, entrada 2002/1744 del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, resultan los siguientes: Hechos: I. El documento objeto de la presente calificación, certificación expedida por don Manuel Requena García, Secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a la Resolución dictada por el Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 2 de diciembre de 1999, con transcripción literal de la misma, por la que se resuelve ejercitar el derecho de retracto de la finca denominada “Sitio del Rincón” de Pozo Alcón, acompañada de copia simple de la escritura de compraventa otorgada en Pozo Alcón, el 29 de junio de 1999 ante la Notario de Quesada doña Rocío García-Aranda Pez, número 222 de protocolo, de fotocopia

de la publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de fecha 16 de mayo de 2000, acta de pago, acta de ocupación, resguardo de la Caja de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda, y fotocopia del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de fecha 19 de marzo de 2001, recurso gubernativo número 19/98, fue presentado por correo el día veintiséis de abril del año en curso, con el asiento 1.345 del Diario 66. II. En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias que han sido objeto de calificación desfavorable: 1.º Se solicita la inscripción de la finca “Sitio del Rincón”, registral 1.315 de Pozo Alcón, mediante el ejercicio del derecho de retracto. En los documentos aportados no consta el consentimiento de los titulares registrales, los cónyuges don Julián R. M. y doña Ana-Regina C. A., que debe ser prestado en escritura pública de venta de la finca, o bien suplido dicho consentimiento mediante la correspondiente resolución judicial instada en juicio declarativo ordinario. A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes: Fundamentos de derecho. I. Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por el registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II. En relación a las circunstancias reseñadas en el hecho II, debe tenerse en consideración: 1. Artículos 1 y 20 de la Ley Hipotecaria. 2. Artículo 1.521 del Código Civil. 3. Artículo 40 d) de la Ley Hipotecaria. 4. Artículo 1.6 del Código Civil. III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el registrador debe proceder a la notificación negativa del documento presentado, quedando desde entonces automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente, por un plazo que vencerá a los sesenta días contados desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga durante la cual, por aplicación del principio hipotecario de prioridad contenido en los artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos posteriores a la misma finca, cuyos asientos de presentación, por tanto, han de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente prorrogada, del asiento anterior. En su virtud: Acuerdo denegar la inscripción del documento objeto de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se indican en el fundamento de Derecho II de la misma nota. Quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. No cabe, dado el carácter insubsanable de los defectos apreciados, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria. Notifíquese el presentante y al funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días naturales contados desde esta fecha. Contra la presente nota de calificación cabe interponer recurso gubernativo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación, el cuál podrá presentarse en este Registro de la Propiedad, así como en cualquier otro Registro de la Propiedad, o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada a los mismos por el artículo 102 de la Ley 24/2002 (“Boletín Oficial del Estado” de 31 de diciembre de 2001). Cazorla, a 16 de mayo de 2002. El Registrador de la Propiedad. Fdo.: Ricardo José Nieves Carrascosa».

III

El Letrado de la Junta de Andalucía, en la representación que por su cargo ostenta, interpuso contra la anterior calificación recurso gubernativo y alegó: Que en la calificación registral subyace una concepción del retracto de espacios naturales protegidos que niega que constituya una potestad administrativa, vinculada al ejercicio de competencias administrativas y a la procura del interés público y dotada de las notas de ejecutividad y ejecutoriedad, propias de cualquier acto administrativo, que hacen innecesario que la Administración recabe el auxilio de los tribunales para la ejecución de sus actos, sin perjuicio de que, luego, por imperativo constitucional, los Jueces y Tribunales controlen la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de estas a los fines que la justifican. Que el examen de la naturaleza del retracto legal previsto en el Código Civil, confirma que se trata de una realidad diferente al retracto admi-